

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 15 de abril de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

10496 *ORDEN de 15 de abril de 1998 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.932/1995, promovido por don Antimo Parreño Jiménez y otros.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 1 de octubre de 1997, en el recurso contencioso-administrativo número 1.932/1995, en el que son partes, de una, como demandantes, don Antimo Parreño Jiménez y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra acuerdo del Ministerio de Defensa por el que se deniega la integración en el grupo D.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Isacio Calleja García, en nombre y representación de don Antimo Parreño Jiménez y otros reseñados en el encabezamiento, contra la Resolución del Director general de Personal del Ministerio de Defensa de fecha 1 de agosto de 1995, que denegó la solicitud de integración en el grupo D de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 en virtud de la titulación que ostenta, debemos declarar y declaramos la mencionada Resolución disconforme con el ordenamiento jurídico, anulándola.

En consecuencia, declaramos el derecho del recurrente, como funcionario del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores del Ministerio de Defensa, a ser encuadrado en el grupo de clasificación D, sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, en lo que afecta al ámbito de competencias del Departamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 15 de abril de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

10497 *ORDEN de 15 de abril de 1998 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo número 2.356/1994, promovido por don Fernando José López Ruiz.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia, con fecha 26 de septiembre de 1997, en el recurso contencioso-administrativo número

2.356/1994, en el que son partes, de una, como demandante, don Fernando José López Ruiz, y de otra, como demandadas, la Subsecretaría del extinto Ministerio de Justicia e Interior y la Delegación del Gobierno en Castilla y León, representadas y defendidas por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución de 26 de junio de 1994, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia e Interior, y las Resoluciones de la Delegación del Gobierno en Castilla y León de fechas 19 y 26 de julio de 1994, sobre cese en el puesto de trabajo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que con estimación parcial del presente recurso contencioso-administrativo, registrado con el número 2.356/94, debemos anular y anulamos, por ser disconformes con el ordenamiento jurídico, el acuerdo del Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior, de fecha 8 de julio de 1994, por el que se cesa al demandante, y la formalización de ese acuerdo de la Delegación del Gobierno de Castilla y León de 19 de julio de aquel año, en el particular de la fecha de cese, y declaramos el derecho de aquél a permanecer en el puesto de trabajo de Asesor de Gabinete hasta el 22 de julio de 1994, con todos los derechos personales y retributivos inherentes a tal declaración.

No se hace condena especial en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, en lo que afecta al ámbito de competencias del Departamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 15 de abril de 1998.—P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Subdirectora general de Personal.

10498 *ORDEN de 15 de abril de 1998 por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 3/1.948/1995, promovido por don Aurelio González Peris.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 21 de enero de 1998, en el recurso contencioso-administrativo número 3/1.948/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Aurelio González Peris, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 11 de septiembre de 1995, que estimó en parte el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 3 de abril de 1995, sobre reintegro de gastos de desplazamiento.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.—Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por don Aurelio González Peris, en su propio nombre y derecho, contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 11 de septiembre de 1995, descrita en el fundamento de Derecho primero, anulando la misma por ser contraria al ordenamiento jurídico, y declarando el derecho del recurrente a percibir de la Administración demandada la cantidad de 58.125 pesetas menos lo ya percibido por aquél por reintegro de gastos de desplazamiento a que se refiere el expediente 7.102-PDZ-9.500.003 (número de referencia 633/95).

Segundo.—No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín